

Creación de un Registro de identificación de animales. Informe 83/2006

La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con la creación del registro de identificación animal previsto en la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Según dispone el artículo 17 de la Ley “Los poseedores de perros que lo sean por cualquier título, deberán identificarlos electrónicamente y censarlos en el Ayuntamiento donde habitualmente viva el animal, dentro del plazo máximo de tres meses contado a partir de la fecha de nacimiento, o en su caso, un mes después de su adquisición. El animal deberá llevar necesariamente su identificación censal de forma permanente”, añadiendo el apartado 3 del precepto que “En el ámbito territorial de la Comunidad de Extremadura se creará un registro canino por cada municipio, estando a disposición de la autoridad regional competente”.

A su vez, el artículo 24.1 dispone que Corresponderá a los Ayuntamientos (...) Establecer y efectuar un censo de las especies de animales de compañía que se determinen”.

Por último, según la disposición adicional quinta “se crea en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dependiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, un Registro Central Informatizado formado a partir de los datos que han de proporcionar los correspondientes registros que han de estar constituidos en cada uno de los municipios de la región”.

De lo dispuesto en los mencionados preceptos se desprende que procederá la creación de un registro en cada Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma, en que constarán únicamente los datos referidos a perros, en el que la Ley parece habilitar igualmente la constancia de los datos identificativos de sus propietarios, que deberán inscribir el animal en el momento de su nacimiento o adquisición.

Teniendo en cuenta este precedente, el tratamiento llevado a cabo por parte de los Colegios de Veterinarios, referido únicamente como se ha indicado al registro de perros y sus propietarios podría considerarse amparado por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en caso de que dichas Corporaciones actuasen en condición de encargado del tratamiento de los Ayuntamientos a los que la Ley 5/2002 encomienda expresamente la llevanza de estos registros.

Para ello, sería preciso que la actividad llevada a cabo por el Colegio se correspondiera exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 3 g) de la Ley Orgánica, que define al encargado del tratamiento como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

A su vez, debería regir en la relación jurídica existente entre los Ayuntamientos y el Colegio el régimen previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, caracterizado por lo siguiente:

- En lo que atañe a los requisitos formales, el artículo 12.2 impone que “la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas”.
- Por lo que respecta al periodo de conservación de los datos, el artículo 12.3 establece que “una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento”.
- En lo referente a la cesión de los datos, de lo establecido en el artículo 12.2 se desprende que no procederá esa cesión, de forma que los datos habrán de ser entregados única y exclusivamente al responsable del fichero. La Agencia Española de Protección de Datos ha considerado que será posible la subcontratación de estos servicios siempre y cuando se especifiquen los siguientes requisitos acumulativos, que deberán figurar en el contrato:
 - a) Que los servicios a subcontratar se hayan previsto expresamente en la oferta o en el contrato celebrado entre el responsable del fichero y el encargado del tratamiento.
 - b) Que el contenido concreto del servicio subcontratado y la empresa subcontratista conste en la oferta o en el contrato.
 - c) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero.

- En cuanto a las medidas de seguridad que hayan de ser adoptadas por quienes realicen trabajos de tratamiento de datos por cuenta de tercero, habrán de ser, en principio, las mismas que las impuestas al responsable del fichero, tal y como se desprende de lo previsto en los artículos 9 y 12.2 de la Ley Orgánica.
- Por último, según el artículo 12.4, “en el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente”, siendo, en consecuencia, de aplicación el régimen sancionador establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ley, sujetando el primero de ellos al encargado del tratamiento a dicho régimen.”

De este modo, únicamente en caso de que constase el soporte contractual o convencional que contenga los requisitos que se han venido exponiendo será posible considerar al Colegio consultante encargado del tratamiento, siendo así que el tratamiento de los datos por el Colegio en condición de responsable del tratamiento no encontraría amparo en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 salvo si se contase con el consentimiento de los afectados.

En consecuencia, siempre que se cumplan los requisitos citados, el tratamiento sería posible, siendo el Colegio encargado del tratamiento y el Ayuntamiento respectivo responsable del fichero.

Dicho lo anterior, ostentando el Ayuntamiento la condición de responsable del fichero, no cabrá duda alguna acerca de su titularidad pública, sin que sea necesario proceder al “desdoblamiento” del fichero en dos distintos, dado que el Colegio no sería en ningún caso responsable del mismo.

En cuanto a la transmisión de los datos al Ayuntamiento respectivo, y teniendo en cuenta lo que se ha venido indicando, no nos encontraríamos ante un supuesto de cesión de datos. Por su parte, la cesión a otras Administraciones Públicas sería posible en caso de que exista una norma con rango de Ley habilitante de la cesión (artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 o la Administración destinataria ejerciera competencias similares en relación con la protección de los animales (artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, interpretado a sensu contrario).

En cuanto al cumplimiento del deber de información, el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea”.

El precepto transcrito tiene su origen en lo establecido en el artículo 11.2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la que la Ley Orgánica 15/1999 es transposición al Ordenamiento español. Según dicho precepto “Las disposiciones del apartado 1 (referido al deber de información en caso de recogida de los datos de fuentes distintas al propio afectado) no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley. En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas”.

De este modo, una interpretación coherente del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, a la vista de lo establecido en la Directiva 95/46/CE de que trae causa, implica que el deber de información al afectado quedará exceptuado en los supuestos en que el tratamiento o cesión de datos venga expresamente regulado en una norma con rango de Ley, como sucedería en el presente supuesto.

Por último, en cuanto a la posible oposición del dueño del animal a su inclusión en el Registro, el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”.

Como se ha indicado la inscripción del perro y de los datos identificativos de su titular en el Registro trae causa de lo previsto expresamente en el artículo 17 de la Ley 5/2002, por lo que existe una norma con rango de Ley que prevé expresamente el tratamiento de los datos, impidiendo el ejercicio del derecho de oposición. En este mismo sentido, dispone el artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999 que “Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables”.